



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	Verbal – Responsabilidad civil contractual
DEMANDANTE	Comunicación Celular S.A. -Comcel S.A.-
DEMANDADOS	Celular 2000 Comunicaciones & Cía. S.A.S. y Héctor Mauricio Zapata Rivera
AUTO	Confirma decisión
RADICADO	05001 31 03 015 2020 00008 01

Medellín, ocho de febrero de dos mil veinticuatro

El Despacho resuelve la apelación interpuesta por la parte demandante en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

1.1. En proveído de 28 de septiembre de 2023 el Juzgado 015 Civil del Circuito de Medellín declaró probada la excepción previa de pleito pendiente, por lo cual, decretó la terminación del proceso y condenó en costas a la parte demandante. Como cimiento de lo anterior, tuvo en consideración que en el Juzgado 025 Civil del Circuito de Bogotá se tramitaba proceso de responsabilidad civil contractual incoado por Celular 2000 frente a Comcel, bajo el radicado 11001-31-03-025-2020-00241-00, proceso que fue admitido el 18 de septiembre de 2020 y se encuentra vigente.

Señaló que la excepción de pleito pendiente requería que existiera identidad de partes, identidad de causa e identidad de objeto, en ese orden de ideas, verificó que había identidad de partes, en tanto, el proceso tramitado por su homólogo en Bogotá vinculaba a las mismas personas jurídicas del presente asunto; indicó que existía identidad de causa, debido a que, la demanda primigenia corresponde a la celebración y ejecución de un contrato, que en dicho libelo se denominó como “de agencia comercial” suscrito el 6 de octubre de 2004, y como pretensiones de este, se deprecó la declaración de la existencia del mismo en los términos del contrato debatido, así como el incumplimiento de las obligaciones contractuales que resultaran probadas, y que allí fueron determinadas como comisiones, utilidades, bonificaciones, incentivos y otros, así como los intereses de mora. Mientras tanto, el presente

procedimiento corresponde al incumplimiento de las obligaciones contractuales del que se denominó como "contrato de distribución", suscrito el 6 de octubre de 2004 y sus subsiguientes adendas; y consecuentemente se exigió la declaración de la existencia de obligación de cartera insoluta por el valor determinado en la demanda, su orden de pago y con sus respectivos intereses moratorios. Por lo anterior, el despacho concluyó que ambos procesos se encaminaban a la declaración de existencia de un contrato suscrito el 6 de octubre de 2004 por ambas partes; a la ejecución del mismo, a la verificación del incumplimiento de este, por una, o por ambas partes, y al pago de lo que de dicho incumplimiento se desprendiera. Así las cosas, determinó que ambas demandas tenían pretensiones idénticas y estaban soportadas en los mismos hechos.

Finalmente, precisó que la decisión que se produjera en el proceso tramitado por el Juzgado 025 Civil del Circuito de Bogotá en el proceso Rad. 2020-00241-00 incidiría definitivamente en este asunto, pues allí se decidirá el tipo de contrato que suscribieron las partes, sobre la existencia de este, las prestaciones a que los contratantes se obligaron, la existencia y cumplimiento de estas, las condenas a que haya lugar; y que, en todo caso, serían las mismas decisiones que se adoptaría en este procedimiento, si no existiera la otra demanda.

1.2. Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de Comcel interpuso recurso de apelación, con el objetivo de que se revocara la providencia impugnada y en su lugar se continuara con el trámite del proceso. Para tal efecto, sostuvo que no existía identidad de causa toda vez que, el proceso aquí conocido obedece a una responsabilidad contractual derivada del incumplimiento de tres contratos: i) contrato de distribución de voz de 6 de octubre de 2004, ii) contrato de distribución de datos de 31 de octubre de 2006 y iii) contrato de distribución de Blackberry de 16 de abril de 2007, mientras que el proceso verbal desarrollado en el Juzgado 025 Civil del Circuito de Bogotá correspondía a una declaración y pago de una típica agencia comercial únicamente respecto del contrato de distribución de voz de 6 de octubre de 2004. De igual modo, adujo que no había identidad de objeto, debido a que, en este caso no se pretendió la declaración de existencia de los tres contratos de distribución, dado que *per se* eran tales contratos, pues lo que se buscaba es la declaración de incumplimiento de esos contratos y su respectiva indemnización, por el contrario en la otra demanda se pretendió la declaración de agencia comercial junto con sus demás derechos y condenas derivadas,

pero únicamente del contrato de distribución de voz suscrito el 6 de octubre de 2004.

Los demandados interpusieron recurso de reposición y en subsidio apelación, con el objetivo que se repusiera lo resuelto o en su defecto se concediera la alzada. Para tal efecto, sostuvieron que no se espació la segunda audiencia para esperar la justificación que efectivamente se radicó; no se envió el link de la audiencia como solía hacerse en días previos a la audiencia para ofrecer seguridad de que efectivamente la diligencia se llevaría a cabo; se faltó a los protocolos de conectividad y no quedó grabada en cámaras la identificación de las partes que concurrieron a la misma; y el juez no examinó en la sentencia la validez del contrato, pese a haber sido una de las pretensiones de la demanda.

Trajerón a colación un precedente de la Corte Suprema de Justicia en que se analizó un asunto similar, para significar que el despacho de primera instancia no debió haber emitido fallo sin la presencia de los apoderados de la parte demandada, pues ello vulneró su derecho al debido proceso. Igualmente, arguyeron que no era de recibo lo expuesto por el despacho, tendiente a concluir que las nulidades se habían saneado porque se actuó sin proponerlas, pues solo se hizo pedir el link del expediente para evidenciar las anomalías al no notificar el auto que fijó fecha para audiencia. Por último, anotaron que no era cierto la extemporaneidad de la acreditación de la incapacidad, ya que la actuación se surtió a sus espaldas, pues debió llamarse telefónicamente para confirmar la diligencia.

1.3. Surtido el traslado respectivo la contraparte se pronunció y pidió se confirmara la decisión. Como sustento de lo anterior, adujo que la conclusión del apoderado de Comcel desconocía la naturaleza comercial de la relación que existió entre Comcel y Celular 2000. Señaló que la existencia del contrato estaba plenamente acreditada con los reglamentos contractuales que las partes suscribieron y que obraban en el expediente. Anotó que todos los reglamentos contractuales cuya existencia quedó demostrada regularon la misma relación jurídico patrimonial. En este orden de ideas, expuso que el contrato inicial de 6 de octubre de 2004 fue modificado y complementado a lo largo del tiempo, por los otrosíes y los contratos adicionales, nunca se liquidó y ello significa que la relación jurídica patrimonial entre las partes se continuó por medio del contrato adicional y, en lo pertinente, por los reglamentos contractuales siguientes que las partes firmaron, en relación con el mismo objeto. Por lo tanto, la relación inicial se mantuvo y continuó, repitiéndose prácticamente en

todo, el marco contractual inicialmente acordado, hasta la terminación el 15 de marzo de 2017.

Refirió que, de forma clara y expresa la cláusula 3 del contrato inicial incluyó en el objeto la distribución y comercialización de los productos y servicios de Comcel, no solo del servicio de voz como el apoderado de Comcel sugirió. Entonces, según el texto del contrato, tanto datos como Blackberry son productos o servicios que Comcel ofrecía o prestaba a sus abonados y quedaban comprendidos en el objeto de la relación contractual desde el inicio, en consecuencia, los contratos posteriores se referían al mismo objeto, eran reglamentos contractuales que complementaban y prácticamente reproducían, respecto de un producto o servicio en particular, la relación contractual existente. Adicionalmente, dijo que Comcel preparó un estado de cuenta con corte a 18 de mayo de 2017 en que incluyó el total de la cartera que, según Comcel, Celular 2000 le adeudaba por concepto de "kit prepago", por ello, de reconocer la existencia de más de una relación contractual, Comcel debió haber emitido estados de cuenta separados por cada una de ella, o por lo menos, identificar bajo qué relación contractual se adeudaba cada uno de los ítems que conformaba la cartera supuestamente vencida. Así mismo, el apoderado de Comcel consignó en la demanda pretensiones de condena relativas únicamente a la cartera, que supuestamente Celular 2000 adeudaba por concepto de "kit prepago", ninguna pretensión se refirió en específico y de manera separada a relaciones contractuales diferentes e independientes entre sí.

Sostuvo que, en cumplimiento y en desarrollo del objeto del contrato inicial y por iniciativa de Comcel se suscribió un documento contractual complementario para datos el 31 de octubre de 2006 y otro para Blackberry el 16 de abril de 2007, los cuales son dos reglamentos contractuales conexos dirigidos a obtener un resultado final que dependía de la adecuada concreción de los negocios celebrados. Como la jurisprudencia y la doctrina han reconocido, los interesados celebran dos o más contratos en función de una operación económica concreta, de manera que, sólo la cabal ejecución de estos conduce a la consecución del objetivo común que persiguen.

Finalmente arguyó que, de conformidad con lo previsto por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 28 de julio de 1940, los pactos no tienen la condición que les den los contratantes, sino la que realmente les corresponde, en este sentido, la calificación jurídica de un contrato (su naturaleza) se funda en las obligaciones esenciales pactadas y en la realidad fáctica, por ello, el

contrato no es "*per se*" de distribución. Aunado a ello, argumentó que el apoderado de Comcel desconocía que la litis comprendía, no solo lo señalado en la demanda, sino también en la contestación y las excepciones que la contraparte proponga, y en este caso en concreto, en que Celular 2000 se opuso a todas las pretensiones y propuso como excepciones de fondo que el contrato celebrado era de agencia comercial; la convención celebrada contenía disposiciones antinómicas que se resolvían a favor de la calificación como agencia comercial; el contrato era de adhesión y se debía interpretar a favor del adherente. Por lo tanto, no era cierto que no existiera identidad de objeto entre los procesos.

1.4. El Juzgado 015 Civil del Circuito de Medellín concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo.

CONSIDERACIONES

2.1. El artículo 864 del Código de Comercio define el contrato de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 864. <DEFINICIÓN DE CONTRATO>. El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta.

Se presumirá que el oferente ha recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe la remisión de ella dentro de los términos fijados por los artículos 850 y 851."

2.2. En relación con el coligamiento contractual, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SC18476 de 2017 indicó:

"La realidad de los negocios enseña que hoy en día, muchos de ellos requieren para su materialización la celebración de dos o más contratos, en sentido estricto, puesto que sólo de la completa y oportuna ejecución de cada uno de ellos y de todos en conjunto, puede conseguirse el propósito perseguido, a diferencia de lo que, por regla general, ocurría antes, cuando el contrato era concebido aisladamente, de modo que su realización, entendida como un acto individual y completamente

autónomo, satisfacía las necesidades de los interesados en su celebración.

Por eso, con razón se ha dicho que "[e]l individualismo contractual viene dejando paso a la contratación grupal. Y ello no resulta caprichoso, puesto que lo perseguido es ahora un resultado negocial, una operación económica global, buscada a través de un 'programa' que una o varias empresas proponen. (...). Se trata ahora de contratos entrelazados en un conjunto económico, persiguiendo lo que se ha dado en llamar una 'misma prestación esencial', un 'todo' contractual para un mismo y único negocio. (...). El acento aparece puesto en el 'negocio' y no en el 'contrato'. (...). Y de allí la conexidad, vinculación, relación o colegiación. (...). Con las mismas 'partes' o con 'partes' que sólo coinciden a medias"¹.

Trátase de la utilización práctica de las diferentes tipologías contractuales, que se enlazan para conformar una unidad negocial inescindible, de modo que surgen entre las diversas formas aplicadas una relación ya sea de mutua dependencia, ora de subordinación, todo en procura de facilitar el intercambio de bienes y productos, la prestación de servicios y el crédito.

Es lo que la doctrina y la jurisprudencia han dado en designar como, entre muchas otras locuciones, unión, coligamiento o vinculación de contratos, figura que supone una pluralidad de ellos que, sin perder su fisonomía y autonomía propias, se conjugan para la efectiva realización de una operación económica, que sólo de esta manera puede obtenerse.

...

El fenómeno que se comenta, no debe confundirse con los contratos complejos o mixtos, en los que se está en presencia de un único negocio jurídico, por lo general atípico, que integra diversas situaciones de variado temperamento, en procura de la consecución de su fin. Como se nota, en este supuesto hay un sólo contrato que refleja en su interior la previsión de diferentes figuras autónomas, que se suman, para permitir la concreción de su objeto.

Es del caso enfatizar, entonces, que el coligamiento de contratos se da cuando hay lugar a la celebración de dos o más convenciones, cada una sometida a las normas que la regulan y dirigida al fin que la caracteriza,

¹ Moseet Iturraspe, Jorge. "Contratos Conexos. Grupos y redes de contratos". Santa Fe, Rubinzal – Culzoni Editores, 1999, pág. 9.

pero que sirven a un propósito que las supera y arroja, cuyo logro sólo es posible en virtud de su armónica conjunción.

"Cuando existen varios contratos -señala un autorizado autor argentino- el fenómeno es distinto de la atipicidad, apreciada ésta en sentido estricto. En el contrato atípico existe una deformación del tipo en virtud de cláusulas que las partes incorporan a un contrato. En el supuesto de varios contratos, ellos mantienen su tipicidad y autonomía, pero existe una finalidad 'supracontractual', un negocio que se quiere hacer y para el cual se utilizan varios tipos contractuales"²."

2.3. Por otra parte, en lo atinente a la excepción de pleito pendiente y la identidad de objeto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia STC11252 de 2019 reiteró la posición asumida por el órgano colegiado y precisó:

"Recuérdese, como se replicó en STC7931-2019, que

«(...) [p]ara que la litispendencia se configure, es menester que haya una relación procesal en la cual se pretenda debatir la misma cuestión que es objeto del nuevo pleito, por igual causa y entre las mismas partes. Es decir, que exista un juicio anterior sobre la misma acción (...).

Chiovenda enseña que la litispendencia quiere decir, en primer lugar, que pende una relación procesal con la plenitud de sus efectos, uno de los cuales es impedir la existencia de otra relación sobre la misma cuestión sustancial. El pleito pendiente implica así la concurrencia de dos litigios al que asisten las mismas partes, sobre idéntico objeto y con base en igual causa. Por eso tiene estrecha relación con la cosa juzgada, mas se presenta entre los dos fenómenos esta diferencia: la cosa juzgada material impide una nueva sentencia sobre lo mismo que se falló antes; la excepción de litispendencia tiene carácter preventivo, pues impide el riesgo de que se forme contradictoriamente la cosa juzgada.

² Lorenzetti, Ricardo Luis. "Tratado de los Contratos". Tomo I. Santa Fe, Rubinzal – Culzoni Editores, 2004, pág. 33.

Por eso Calamandrei observa que desde que se constituye la relación procesal se crea entre los sujetos del proceso un estado jurídico denominado litispendencia, el cual significa entre otras cosas que las partes no son libres de dirigirse a otro Juez sobre idéntica cuestión, y que solamente dentro de la relación constituida se debe pronunciar la resolución de fondo» (CSJ SC, 17 jul. 1959, G. J. t. XCI, pág. 24)."

CASO CONCRETO

En el caso bajo examen, el recurso formulado plantea resolver si el juez de primer grado tuvo razón al declarar probada la excepción previa de pleito pendiente y decretar la terminación del proceso, porque concluyó que había identidad de partes, de causa y de objeto con el proceso conocido por el Juzgado 025 Civil del Circuito de Bogotá Rad. 2020-00241-00.

Al respecto se tiene que, el juez de primer nivel tuvo razón al concluir que, en el caso *sub judice* concurren los presupuestos procesales de la excepción de pleito pendiente, a saber, i) existencia de dos procesos vigentes, ii) identidad de partes, iii) identidad de causa y, iv) identidad de objeto. En este orden de ideas, auscultado el expediente se logra verificar que en cuanto a la primera exigencia existe un proceso previo Rad. 11001-31-03-025-2020-00241-00. Respecto del segundo requisito se observa que tanto en el proceso conocido por el Juzgado 025 Civil del Circuito de Bogotá como el tramitado por el Juzgado 015 Civil del Circuito de Medellín, las partes son las mismas, ya que, en el procedimiento anterior funge como demandante Celular 2000 representada legalmente por Héctor Mauricio Zapata Rivera y como demandada Comunicaciones Celular S.A. -Comcel S.A.-; y en este punto hay que advertir como bien lo hizo el juzgador de primera instancia que, pese a que los extremos procesales ocupan un extremo diferente en ambos procesos, es decir, que en el primero es demandante Celular 2000 y en el segundo es demandado, ello no quiebra la identidad que se predica.

Ahora, en relación con los requerimientos, tercero y cuarto esto es, los de identidad de causa y de objeto, se evidencia que los hechos que fundamentan ambas demandas son equivalentes, porque en los dos procedimientos se habla de una relación jurídica contractual suscrita el 6 de octubre de 2004 que conllevó a la celebración de acuerdos posteriores para la ejecución del objeto contractual, así como de presuntos incumplimientos por las dos personas jurídicas y las pretensiones de ambas demandas están encaminadas a la

declaratoria de incumplimiento de ese vínculo contractual y al pago de los perjuicios e intereses moratorios.

Al respecto, debe indicarse que si bien el apoderado judicial de Comcel S.A. sostuvo que no existía identidad de causa, por cuanto, en el nuevo proceso se hablaba de tres contratos diferentes, a saber, contrato de distribución de voz celebrado el 6 de octubre de 2004, contrato de distribución de datos suscrito el 31 de octubre de 2006 y contrato de distribución de Blackberry firmado el 16 de abril de 2007, lo cierto es que, tales convenios no pueden ser analizados de manera independiente y autónoma, pues como el representante judicial de Celular 2000 señaló, los escritos en mención constituyen reglamentos contractuales dirigidos a la ejecución del objeto del acuerdo inicial. En esta línea argumentativa, debe tenerse en cuenta que en la cláusula 3 del contrato inicial se consignó el objeto de la relación de la siguiente manera:

"En virtud de este contrato, OCCEL, concede a CELULAR 2000 COMUNICACIONES Y CÍA LTDA. Como DISTRIBUIDOR CV – OCCEL, la distribución de los productos y la comercialización de los servicios que OCCEL señale conforme a las denominaciones que ésta maneje, a las existencias que tenga y a los términos y condiciones pactados.

Por consiguiente, EL DISTRIBUIDOR se obliga para con OCCEL a comercializar los productos y servicios y, a realizar las actividades y operaciones inherentes a su distribución, dentro de éstas, el mercado y comercialización, las cuales ejecutará en su propio nombre, por su propia cuenta, con su propia organización, personal e infraestructura y con asunción de todos los costos y riesgos." (archivo 3. Anexo 5 (tercera parte), 6 y AZ 1 (primera parte) archivo 35.2. AnexosExcepcionPrevia pág. 41-42).

Igualmente, se corroboró que en las cláusulas 1.9 y 1.10 del acuerdo en mención se definió el concepto de términos y servicios así:

"1.9 "Productos", significa transceptores y otros módems, equipos de transmisión de datos, etc. que operen o que sean conexos, complementarios o auxiliares al Servicio, todo de conformidad con las instrucciones que al efecto imparta OCCEL.

1.10 "Equipos", significa "un teléfono o terminal celular TANGIBLE de transmisión en la banda de 800MHTZ u otras bandas CON TECNOLOGÍA

TDMA Y/O GSM u otras tecnologías homologadas por el Ministerio de Comunicaciones para su comercialización y autorizadas o aprobadas por OCCEL. Aquellos productos y equipos que deban ser homologados de acuerdo con la Ley, las instrucciones o requerimientos deberán ser homologados ante el Ministerio de Comunicaciones de Colombia.” (archivo 3. Anexo 5 (tercera parte), 6 y AZ 1 (primera parte) archivo 35.2. AnexosExcepcionPrevia pág. 40).

Por su parte, en el contrato suscrito el 31 de octubre 2006 se dispuso que el objeto y la definición de servicio era:

"Por medio del presente contrato, COMCEL designa a la Sociedad CELULAR 2000 COMUNICACIONES Y CIA LTDA, como DISTRIBUIDOR para la comercialización del Servicio (según definición que aparece más adelante) ..."

...

2.1. Servicio: Servicio de transmisión de datos, prestado por COMCEL, utilizando la tecnología GPRS y la red GSM de COMCEL.” (Archivo 03. DemandayAnexos pág. 116).

Y en el contrato de 16 de abril de 2007 se definió como objeto y servicio:

"En virtud de este contrato, COMCEL, concede a CELULAR 2000 COMUNICACIONES Y CIA LTDA, como DISTRIBUIDOR, la distribución de los Productos y la comercialización de los Servicios BlackBerry, (propiedad de la Sociedad Research In MOtion Limited RIM) que COMCEL señale conforme a las denominaciones que ésta maneje, a las existencias que tenga y a los términos y condiciones pactados.

Por consiguiente, EL DISTRIBUIDOR se obliga para con COMCEL a comercializar los Productos y Servicios BlackBerry y, a realizar las actividades y operaciones inherentes a su distribución, dentro de éstas, el mercadeo y comercialización, las cuales ejecutará en su propio nombre, por su propia cuenta, con su propia organización, personal e infraestructura y con asunción de todos los costos y riesgos...” (Archivo 03. DemandayAnexos pág. 149).

Así las cosas, es dable determinar que en el presente caso los dos contratos de 31 de octubre de 2006 y de 16 de abril de 2007, son convenios que estaban

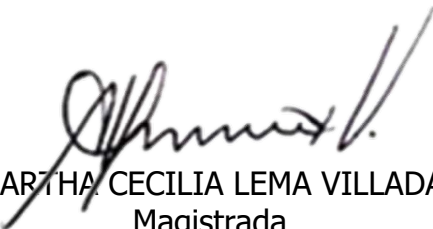
encaminados a ejecutar el objeto contractual del acuerdo de 6 de octubre de 2004, esto es la distribución de los productos y la comercialización de los servicios que OCCEL (posteriormente COMCEL) señalara conforme a las denominaciones que manejara. Por ello, es prudente establecer que los contratos recientes configuraban un coligamiento contractual y, en ese orden, se trata de una misma relación jurídica y no de contratos independientes y autónomos, tanto así que COMCEL al liquidar las presuntas deudas a cargo de CELULAR 2000, abarcó los acuerdos suscritos como una relación jurídica, sin discriminarse por cada contrato.

Consecuente con lo anterior, la decisión proferida por el Juzgado 015 Civil del Circuito de Medellín en auto de 28 de septiembre de 2023 será confirmada, por lo que este despacho RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR el auto de 28 de septiembre de 2023 proferido por el Juzgado 015 Civil del Circuito de Medellín.

SEGUNDO. Se condena en costas a la parte recurrente, como agencias en derecho se fija la suma de 1 SMLMV.

NOTIFÍQUESE



MARTHA CECILIA LEMA VILLADA
Magistrada